

Recomendación 08/2019

Caso de violaciones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico.

Responsable: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León.

Derechos humanos trasgredidos:

- Derecho a la integridad personal:
 - Por uso desproporcionado de la fuerza.
 - Tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Derechos de las personas privadas de la libertad:
 - Abstención u omisión en el deber de custodia.
 - Abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física o psicológica de la persona privada de su libertad.

Monterrey, Nuevo León a 13 de mayo de 2019.

**Lic. Aldo Fasci Zuazua,
Secretario de Seguridad Pública del Estado**

La Comisión Estatal de Derechos Humanos¹ ha examinado las evidencias recabadas en el expediente CEDH-2019/330/03 MP 54, 58 y 59, con motivo de la queja iniciada de oficio por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, atribuidas al personal del mencionado reclusorio dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Así como las quejas planteadas por Q1 y Q2, personas privadas de la libertad en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico contra personal de

¹ De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 102, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; y 3 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

custodia de dicho centro de reclusión y elementos de policía de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil.

El análisis de los hechos y constancias, se realiza bajo los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica², además, se garantiza en todo momento la protección de datos personales³.

Es importante mencionar que las resoluciones que emite esta Comisión, se centran en el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en nuestro derecho interno e internacional, así como en las interpretaciones evolutivas y progresivas que realizan los organismos nacionales e internacionales facultados para hacerlo, bajo la óptica de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En cuanto a las evidencias recabadas, solo se hace referencia a las constancias relevantes, en atención a su viabilidad para acreditar o desacreditar los hechos expuestos.

Ahora bien, para una mejor comprensión deberá tenerse en cuenta el siguiente:

Glosario

Alcaide:	Alcaide del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico
Comisario:	Comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria
Comisión:	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Fuerza Civil:	Elementos de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil
Ley Nacional:	Ley Nacional de Ejecución Penal
Penal del Topo Chico:	Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico

² Acorde a lo establecido en el artículo 41 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

³ Artículos 6, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 4, segundo párrafo, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A. ANTECEDENTES

1. El 27 de marzo de 2019, en la página de internet del periódico El Norte, se publicó una nota titulada "Trasladan a 512 reos de NL", en la que se dio a conocer que, con cuatro operativos consecutivos en los tres penales del estado y en el Centro Único para Mujeres, inició el traslado de 512 internos federales a penales de Coahuila y de Morelos.

1.1. En relación a la información difundida en la nota periodística, esta Comisión dictó la medida precautoria número 54⁴, dirigida al Secretario de Seguridad Pública del Estado, fundamentalmente para que la orden de traslado fuera emitida o validada por la autoridad judicial; y las personas trasladadas no recibieran agresiones físicas o mentales, ni tratos humillantes que propiciaran la exhibición pública.

Como respuesta a la medida precautoria, los Alcaldes de los reclusorios Apodaca, Cadereyta y Topo Chico, así como la Encargada del Centro de Reinserción Social Femenil, informaron que dieron vista a la autoridad judicial correspondiente sobre el traslado de las personas privadas de la libertad para que ésta validara el mismo, de conformidad con el artículo 52 de la Ley Nacional⁵.

⁴ A través de la cual se solicitó lo siguiente:

Primera. Que en los actos de revisión se atienda a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así mismo, que se realicen de la manera menos intrusiva posible, respetando la intimidad y la integridad física de las personas privadas de libertad, como de la población penitenciaria en general.

Segunda. Se informe a la autoridad judicial correspondiente sobre el traslado de las personas privadas de su libertad en los referidos centros a los Centros Federales de Readaptación Social, para que ésta determine lo conducente.

Tercera. Se gire la instrucción al personal a su cargo para que, en todos los casos de traslados de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, la orden sea emitida o validada por la autoridad judicial que conozca del proceso.

Cuarta. Se brinde información oportuna a las familias de las personas privadas de la libertad sobre el centro de reclusión al cual fueron trasladados.

Quinta. Se deberá garantizar en todo momento, que las personas privadas de libertad durante el traslado, no reciban agresiones físicas o mentales, ni tratos humillantes que propicien la exhibición pública.

⁵ Ley Nacional de Ejecución Penal

Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado (...)

De los cuatro penales, solo el Centro de Reinserción Social Apodaca, allegó las documentales de las cuales se desprende que la autoridad judicial fue notificada del traslado.

También que, a través del departamento de Trabajo Social de cada penal, se brindó información a los familiares, relacionada con el penal al cual se trasladó a las personas privadas de la libertad.

Y en cuanto a demostrar las condiciones del estado físico de las personas privadas de la libertad, los cuatro Alcaldes de los centros penitenciarios remitieron los dictámenes médicos practicados previo a los traslados efectuados en fecha 26 y 27 de marzo de 2019 a las personas trasladadas, de los que únicamente se desprende que, una mujer del penal femenino presentaba equimosis en región torácico y dorsal; del Centro de Reinserción Social Cadereyta, tres personas trasladadas tenían lesiones como, edema en dorso de ambas manos, eritema en ambos tobillos, excoriaciones múltiples en región escapular izquierda con costra hemática, herida cortante de cuatro centímetros en región parietal izquierda, eritema y edema en misma área, eritema en pabellón auricular izquierdo y edema en pómulo izquierdo.

Sin embargo, es preciso aclarar que en cuanto a las lesiones descritas en los dictámenes a los que se hace referencia en el párrafo anterior, no se describe la temporalidad de las mismas.

1.2. Personal de este organismo, se constituyó en los cuatro centros penitenciarios el mismo 27 de marzo de 2019, y recabó la siguiente información:

El Alcaide del **Centro de Reinserción Social Apodaca**, informó que en fecha 27 de marzo de 2019, de ese centro, se trasladaron a 90 personas privadas de la libertad, al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Del **Centro de Reinserción Social Cadereyta**, el 26 de marzo de 2019, se trasladó a un total de 69 reclusos, al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Del **Centro de Reinserción Social Femenil**, se trasladó a 40 mujeres privadas de la libertad al Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en el estado de Morelos, por determinación de la Agencia de Administración Penitenciaria, en razón de cuestiones de seguridad.

Previo a la entrevista con personal del **penal Topo Chico**, en las inmediaciones se observó a familiares que demandaban información sobre las personas privadas de libertad.

Por lo que a este centro respecta, el Comisario informó que se trasladó a 297 internos al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila. Indicó, que todos los traslados obedecieron a una medida especial de seguridad que solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, a fin de restablecer la gobernabilidad de los centros penitenciarios.

2. El mismo 27 de marzo de 2019, diversos medios informativos de la entidad, dieron cuenta que posterior al traslado de las personas privadas de la libertad, al interior del penal Topo Chico se registraron disturbios, y reportaron trece heridos, uno por arma de fuego⁶. Que los familiares de los reclusos denunciaban que éstos habrían sido golpeados por las autoridades. Incluso, un oficial señaló que se realizaron detonaciones de salva y escopetas de gas pimienta⁷.

2.1. A fin de constatar la información transmitida en los medios de comunicación, personal de este organismo se entrevistó con el Comisario en el penal Topo Chico, quien informó que, una vez concluido el operativo de traslado, los policías de Fuerza Civil se retiraron del penal; por lo que un grupo aproximado de 300 reclusos iniciaron un enfrentamiento en el área de ampliación, por lo que tuvieron que ingresar de nueva cuenta elementos de Fuerza Civil y, en conjunto con personal de custodia, contuvieron a los rijosos y recuperaron la seguridad del centro penitenciario.

Agregó que un interno realizó disparos con arma de fuego, y lesionó a uno de sus iguales. Resultando lesionados 20 custodios, de los cuales 4 quedaron internados, y que 10 personas privadas de la libertad fueron trasladados para su atención médica al Hospital Universitario, entre ellos una persona herida por esquirla de bala.

Por otra parte, el Alcaide, informó que PF murió en esa misma fecha, por causas naturales. De acuerdo a la información rendida por personal del

⁶ Véase www.elnorte.com, "Protestan en penal del Topo Chico", 27 de marzo de 2019.

⁷ Véase www.elhorizonte.mx, "Surgen disturbios en Penal del Topo Chico tras traslados de reos", 27 de marzo de 2019.

Servicio Médico Forense, el resultado de la necropsia como causa de muerte fue “infarto agudo al miocardio”.

2.2. Esta Comisión, al tener conocimiento que personas privadas de la libertad, como personal de custodia adscrito al penal Topo Chico, resultaron lesionadas, emitió la medida precautoria 58⁸.

En respuesta, el Alcaide del penal Topo Chico, informó que resultaron lesionados un total de 76 personas, de los cuales 13 fueron enviados de manera urgente al Hospital Universitario para valoración especializada, quedando uno de ellos hospitalizado. Al resto de los lesionados se les realizaron suturas y se les proporcionaron analgésicos en el propio penal.

A los elementos de custodia lesionados, se les brindaron los primeros auxilios en el centro penitenciario, y posterior a ello fueron llevados al servicio médico ISSSTELEON.

2.3. Por lo tanto, personal de esta Comisión entrevistó en el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y P11, personas privadas de la libertad del penal Topo Chico, que resultaron lesionadas con motivo de los hechos suscitados el 27 de marzo de 2019.

P1 refirió que fue agredido físicamente por policías institucionales.

P2, P3, P4, y P5 manifestaron que fueron objeto de agresiones físicas a manos de sus iguales, mientras se encontraban desarrollando sus labores, tanto en el patio, como en sus celdas.

P6 y P7 externaron que elementos de Fuerza Civil los agredieron físicamente, con tubos y macanas, los llevaron al patio del penal donde permanecieron aproximadamente dos horas.

P8 narró que elementos de Fuerza Civil ingresaron a su celda, lo hincaron y lo golpearon en diferentes partes del cuerpo; los elementos portaban escudos, macanas y armas de fuego.

⁸ A través de la cual se solicitó lo siguiente:

Única: Se proporcione la atención médica pertinente y oportuna a las personas privadas de la libertad y custodios, que resultaron lesionados, mediante la adopción de las medidas necesarias e inmediatas, preservando su derecho a la salud, privilegiándose el respeto y protección a sus derechos humanos, evitándose la consumación irreparable de cualquier violación a los mismos o la producción de daños de difícil reparación en su perjuicio.

P9, P10 y P11 no realizaron manifestaciones con relación a lo ocurrido en el penal Topo Chico; solo mencionaron que fueron atendidos medicamente en el nosocomio y se encontraban bien de salud.

2.4. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, y P11 fueron dictaminados por peritos médicos adscritos a este organismo, de los que se desprende que estos presentaban heridas contusas, edemas, hematomas, equimosis, excoriaciones dermoepidérmicas. En los respectivos apartados de observaciones, se señaló como causas probables, traumatismos contusos.

En tanto, P10 presentó heridas contusas en la pierna izquierda, y en el Hospital Universitario le fue extraído proyectil de arma de fuego.

3. El 28 de marzo de 2019, el periódico El Norte publicó unas fotografías, en las que se puede observar a personas privadas de la libertad en un área abierta del penal Topo Chico, algunas desnudas y otras en ropa interior; por lo que este Organismo, dictó la medida precautoria número 59⁹.

3.1. El Alcaide, como respuesta a la anterior medida precautoria, argumentó en su oficio **D2** y anexos, que en ningún momento se violentaron derechos humanos de los reclusos; que la revisión corporal se realizó respetando la intimidad e integridad física de éstos y nunca el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal o rectal.

Que la nota publicada en el periódico EL Norte fue malinterpretada, toda vez que la vestimenta dentro del interior del penal fue modificada, por lo que debido a la sobrepoblación que se tenía en ese momento, se llevó a todos los privados de la libertad al área de cancha, por ser este un espacio amplio, para

⁹ A través de la cual se solicitó lo siguiente:

Primera. Que en los actos de revisión se atienda a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así mismo, que se realicen de la manera menos intrusiva posible, respetando la intimidad y la integridad física de las personas privadas de libertad, como de la población penitenciaria en general⁹.

Segunda. Se investigue y determine con precisión los hechos de los cuales dan cuenta los medios de comunicación, toda vez que la revisión corporal solo tendrá lugar de manera excepcional cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona revisada se niegue a mostrarla. La revisión interior solo se realizará sobre prendas y partes corporales específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal o rectal.

Tercera. Se implementen, en su caso, las acciones que prevengan el respeto a la integridad y dignidad de las personas internas del Centro Penitenciario Topo Chico, a fin de evitar que reciban agresiones físicas o mentales, tratos humillantes que propicien la exhibición pública de su persona.

informarles que el pantalón, camisa, calcetines e incluso la ropa interior, cambiarían a color gris, por lo que se les pidió de manera atenta y respetando su intimidad, sin que fueran golpeados o torturados, se quitaran lo que traían puesto para así proceder con el conteo y ponerles el nuevo uniforme.

4. Los días 27 y 28 de marzo de 2019, personal de esta Comisión, solicitó al Alcaide autorización para ingresar al interior del reclusorio, a fin de constatar las condiciones en las que se encontraban los privados de la libertad, así como para entrevistar a las personas que resultaron lesionadas; el funcionario argumentó que no era posible porque no podía garantizar la seguridad del personal de este organismo.

4.1. El día 29 de marzo de 2019, personal del centro mostraron a funcionarios de este organismo, los objetos de los decomisos realizados en el interior del penal, entre lo que se pudo observar cuatro armas cortas, un arma larga, municiones para las armas, botellas de whisky, latas de cerveza, sustancias con características de la marihuana, cocaína y cristal, anfetaminas, tubos y armas punzocortantes hechizas y machetes.

Sin embargo, cuando se solicitó el acceso para ingresar al interior del centro, los funcionarios manifestaron que las condiciones al interior del penal no eran seguras, ya que a través de las cámaras de monitoreo advirtieron la existencia de armamento que tenían los privados de la libertad, y que éstos, es decir, las armas, no habían sido encontradas.

4.2. El mismo 29 de marzo, personal de este organismo, acompañados por elementos de custodia, quienes portaban equipo antimotines, macanas, armas largas y disuasivas, en compañía de personal del centro, ingresaron al interior del reclusorio. Las autoridades no permitieron que se entrevistara a los internos, porque no era seguro sacarlos de sus celdas y menos llevarlos a algún área privada para que hablaran con ellos, aunado a que no se había realizado la clasificación y reacomodo.

5. Durante los días 30 y 31 de marzo de 2019, personal de este organismo se constituyó en las instalaciones del penal Topo Chico, las personas que salían del penal expusieron sus impresiones durante la visita, así tenemos que, 18 familiares de los privados de la libertad manifestaron que vieron a éstos golpeados, algunos les mencionaron que fueron agredidos por custodios, otros por elementos de Fuerza Civil, y que no les estaban dando atención médica.

5.1. En fecha 01 de abril de 2019, personal de este organismo entrevistó a P12, persona privada de la libertad en el penal Topo Chico, quien rindió su testimonio, y expresó que elementos de Fuerza Civil, le ordenaron guardar sus pertenencias en una bolsa de plástico, lo sacaron de su celda, le colocaron cinchos de plástico en las manos, y lo llevaron al campo de beisbol, donde lo hincaron y permaneció ahí por un lapso aproximado de dos horas, una vez que terminaron las revisiones lo llevaron a su celda.

Pasada una hora, llegaron uniformados a su celda y lo golpearon con un palo de madera en la cabeza, costado izquierdo, en la pierna izquierda y en el glúteo derecho, le colocaron de nueva cuenta cinchos, lo llevaron al campo de futbol donde se encontraban otras personas privadas de libertad, los policías le pidieron que se quitara la ropa, quedó en ropa interior (bóxer), por varias horas, después le entregaron un uniforme en color gris; debido a la lesión que presentaba en la cabeza, fue llevado a el área de servicios médicos donde le realizaron una sutura y le brindaron medicamento.

5.2. También fueron entrevistados por funcionarios de esta Comisión P13, P14 y P15; los tres sí presentaban lesiones, pero ninguno de ellos quiso hacer declaración al respecto de lo sucedido.

De los dictámenes médicos que les fueron practicados a P13, P14 y P15 por perito médico de este organismo, se desprende que presentaban las siguientes lesiones: equimosis, heridas contusas suturadas, excoriaciones dermoepidérmicas, además P15 presentaba una herida no suturada.

5.3. El día 02 de abril de 2019, Q1 planteó queja ante funcionario de esta Comisión, contra elementos de Fuerza Civil porque el día 26 de marzo de 2019, llegaron aproximadamente 30 policías encapuchados y, con equipo antimotines a su celda, le ordenaron que saliera de la celda, le colocaron cinchos de plástico en las manos por atrás de la espalda, lo llevaron a la cancha de beisbol, donde permaneció formado en una fila junto a sus iguales por varias horas. Durante ese tiempo, se realizaron revisiones en los ambulatorios, tirando artículos personales de los reclusos.

Aproximadamente a las 05:00 horas del día 27 de marzo de 2019, le ordenaron regresar a su celda, y elementos penitenciarios lo encerraron bajo llave.

Más tarde, policías de Fuerza Civil se presentaron de nueva cuenta en su lugar de vivienda, rompieron el candado con un mazo e ingresaron a su celda, le dieron tres golpes con la culata de sus armas largas en la espalda, lo sacaron

a empujones, patadas y golpes en varias partes de su cuerpo, y lo llevaron al campo de futbol, el cual se encuentra entre el edificio de mantenimiento y talleres sur, en dicho lugar le ordenaron que se despojara de su ropa, quedó desnudo, le colocaron cinchos en las manos, lo acostaron boca abajo, varios elementos se acercaron y le dieron golpes en la planta de los pies con las macanas, y le preguntaban si sabía quiénes habían golpeado a los elementos penitenciarios, les respondió que no sabía de qué le hablaban y dejaron de golpearlo.

Añadió que junto con él estaban aproximadamente 300 internos, quienes también estaban sometidos. Permaneció en ese lugar aproximadamente una hora, después los uniformados le dijeron que tomara su ropa, y lo llevaron a su celda.

Del dictamen que le fue practicado por perito médico de este organismo a Q1, se desprende que presentaba las siguientes lesiones: edema traumático en región parietal derecha; excoriaciones en región escapular derecha; huellas de rascado en costado izquierdo, y refirió dolor en región dorso lumbar y prurito en región costal izquierdo.

5.4. En la misma fecha, también Q2 planteó queja contra policías de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, porque el día 27 de marzo del presente año, alrededor de las 12:00 horas, aproximadamente 15 elementos de policía llegaron a su celda con tubos, macanas y varillas, les dijeron “*sálganse, no les va a pasar nada*”, por lo que se tiró al suelo con las manos en la nuca, pero lo empezaron a golpear en las costillas, estómago y espalda.

Después lo llevaron al campo, donde ya se encontraban muchos internos acostados boca abajo, él hizo lo mismo, permaneció en ese lugar una hora aproximadamente, no fue desnudado, pero observó que otros internos si lo estaban.

6. En fecha 04 de abril de 2019 el Alcaide remitió contestación al informe documentado solicitado por este organismo.¹⁰

6.1. Allegó el listado de 295 personas trasladadas, de los cuales 48 son del fuero federal y 247 del fuero común.

¹⁰D1

6.2. Respecto a la atención que se brindó a familiares de los privados de la libertad, informó que se proporcionó información, orientación y atención oportuna y se dio acceso a las personas visitantes.

6.3. Que la revisión en los diferentes ambulatorios se realizó respetando la intimidad y la integridad física de los internos.

6.4. El personal de las corporaciones policíacas que participaron fueron de custodia con apoyo de elementos de Fuerza Civil, sin equipos tácticos, únicamente candados de mano.

Asimismo, refirió que el protocolo que se implementó fue el de revisión/cacheo visual.

6.5. De igual manera informó que el día 27 de marzo de 2019, aproximadamente a las 11:30 horas, un policía custodio se presentó en la puerta para solicitar apoyo, ya que éste, como un grupo de custodios del centro penitenciario fueron agredidos físicamente con palos, tubos y piedras, por personas privadas de la libertad, alojados en las secciones B-11 y B-12, ya que se resistieron a una inspección en el alojamiento, por lo que se intervino con apoyo de oficiales de fuerza civil, para salvaguardar la integridad física de los oficiales.

De las personas lesionadas fueron 73 privados de la libertad, de los cuales a 12 se les trasladó al Hospital Universitario para recibir atención especializada, a 33 se atendió en el penal Topo Chico, y el resto no acudió al área médica para ser valorados.

Un total de 23 policías custodios (PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC 17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC22 y PC23), resultaron lesionados.

6.6. Del informe policial homologado se desprende que el día 26 de marzo de 2019, elementos de seguridad penitenciaria realizaron una revisión en los ambulatorios del penal Topo Chico, para descartar la existencia de cualquier objeto ilícito, peligroso o no permitido en las instalaciones del reclusorio, el resultado de dicha revisión fue el aseguramiento de armas blancas, consistentes en cuchillos hechizos y puntillas hechizas, de diferentes materiales y tamaños.

6.7. A las 11:00 horas del día 27 de marzo de 2019, se escuchó mucho ruido y alboroto en el área de Ampliación, como si se tratara de una riña, por lo cual se solicitó el apoyo vía radiofrecuencia, ingresó personal de reacción de fuerza civil, aproximadamente cien elementos, quienes, en conjunto con 130 elementos penitenciarios, a base de comandos verbales y uso de la fuerza no letal, lograron controlar la situación.

Después de las 12:30 horas del mismo día, se continuó con la revisión en el área de panadería, la cual se ubica entre la sección A y B conocida como ampliación, misma que no está pavimentada, no cuenta con cámaras de vigilancia ni tampoco se cuenta con personal designado en ese lugar, y los internos tienen libre acceso durante sus horas de esparcimiento, encontrando una parte de la tierra removida, al revisar se halló una fosa cubierta, que contenía un arma larga, tres armas cortas, cargadores, cartuchos, bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana, bolsas que en su interior contenían sustancia sólida, con las características de la cocaína en piedra, bolsas que contenían polvo en color blanco, con las características de la cocaína en polvo, bolsas que en su interior contenían sustancia sólida en color rosa con las características de las metanfetaminas, chalecos tipo tácticos y un chaleco hechizo que cuenta con dos placas de metal, los cuales fueron asegurados.

6.8. Añadió que, de acuerdo a las posibilidades del personal de seguridad penitenciaria con el que se cuenta actualmente, se mantiene el control de vigilancia en los filtros de accesos peatonales, vehiculares y aduanas de visitas, asimismo, se realizan revisiones exhaustivas en los alojamientos del penal, y el resto de las áreas con las que cuenta.

7. El Centro de Atención a Víctimas de esta Comisión elaboró dictamen médico y psicológico de acuerdo al Protocolo de Estambul (Manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes) realizado a Q1, en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico, del que se advierte como conclusión, lo siguiente:

- Existe una correlación en el grado de consistencia y congruencia entre los hallazgos físicos recabados durante la entrevista, que guardan relación con la mecánica que menciona en la descripción de la agresión que dice haber sufrido.

- Existen hallazgos físicos en la valoración efectuada el día 4 de abril de 2019 de que están relacionados con la mecánica que menciona en la descripción de la agresión que dice haber sufrido.
- El estado físico de la persona Q1 dentro del marco temporal en relación con los acontecimientos de la agresión que dice haber sufrido nos indica que actualmente la persona entrevistada presenta mareos, parestesias de ambas manos, de cabeza, nuca y columna dorsal. Con limitación del movimiento al girar la cabeza a los lados, y limitación de movimiento de ambos brazos.
- Las lesiones físicas que en su momento presentó Q1, (al decir de él) si tiene impacto en su funcionamiento físico actual.
- Existe consistencia y congruencia entre los hallazgos psicológicos recabados durante la entrevista y la descripción de la agresión referida.

Por lo tanto, con ello se acredita que Q1 fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

B. ESTUDIO DE FONDO.

A continuación, se procederá al análisis de los hechos, para lo cual se expondrá el marco normativo de los derechos humanos que resulte aplicable y, posteriormente, se determinarán las causas por las cuales se acredita la responsabilidad de la autoridad.

1. Marco normativo

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación entre otras, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De igual forma, el artículo 18 de la Carta Magna, en armonía con el diverso 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos.

La Ley Nacional tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en ese sentido, la fracción X del numeral 9 establece que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. La fracción II del artículo 19 dispone como una atribución de las autoridades penitenciarias, salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios.

Así también, en su artículo 52, dispone como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50¹¹, que la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los supuestos de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado.

En cuanto a las revisiones, el artículo 61 de la Ley Nacional prevé que todos los actos de revisión deben obedecer a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la manera menos intrusiva posible y que causen las menores molestias a las personas en su intimidad, integridad, libertad, posesiones y derechos. La revisión corporal sólo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona revisada se niegue a mostrarla. La revisión interior sólo se

¹¹ **Ley Nacional de Ejecución Penal**
Artículo 50. Traslados voluntarios

Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución.

realizará sobre prendas y partes corporales específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y/o rectal. El personal que revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona revisada.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 5.1 y 5.2 establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, dispone que toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, que no será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (en adelante Reglas Mandela), específicamente la regla 1, puntualiza que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes.

En el mismo documento, la regla 73, menciona que, cuando los reclusos sean conducidos a un establecimiento o trasladados a otro, se tratará de exponerlos al público lo menos posible y se tomarán las disposiciones adecuadas para protegerlos de los insultos y de la curiosidad del público e impedir toda clase de publicidad.

Asimismo, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen en su principio I, que el Estado como garante frente a las personas privadas de libertad, respetará y garantizará su vida e integridad personal y asegurará condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, especifican en el apartado del Personal Penitenciario, específicamente en su Regla 46. 1), que la administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el personal de todos los grados, puesto que de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena dirección de los establecimientos penitenciarios.

Igualmente, hace referencia a que la administración penitenciaria se esforzará constantemente por despertar y mantener, en el espíritu del personal y en la opinión pública, la convicción de que la función penitenciaria constituye un servicio social de gran importancia y, al efecto, utilizará todos los medios apropiados para ilustrar al público.

Por lo que, será necesario que los miembros del personal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profesionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la seguridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su buena conducta, de la eficacia de su trabajo y de su aptitud física, por lo tanto, la remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar los servicios de hombres y mujeres capaces.

2. Análisis del Caso

El deber del Estado de proteger la vida e integridad personal de toda persona privada de libertad incluye la obligación positiva de tomar todas las medidas preventivas para proteger a los reclusos de los ataques o atentados que puedan provenir de los propios agentes del Estado o terceros, incluso de otros reclusos. En efecto, siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los reclusos, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes de cualquier fuente¹².

En el presente caso, las personas privadas de la libertad en el penal Topo Chico, el día 27 de marzo de 2019, fueron objeto de agresiones físicas por policías de Fuerza Civil y elementos de custodia, en los que se tiene acreditado que 17 reclusos resultaron lesionados, uno de ellos por arma de fuego. Además, se les exhibió desnudos ante sus iguales y funcionarios que ese día se encontraban en el penal Topo Chico.

¹² Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, párrafo 73.

Ahora bien, al confrontar los hechos acreditados con el deber que en materia de derechos humanos tiene la autoridad, se concluye que hubo una manifiesta violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el referido centro penitenciario, por parte de personal de custodia adscritos al Penal Topo Chico, y policías dependientes de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, por las razones siguientes:

Responsabilidad determinada

Primera. El 27 de marzo de 2019, los medios de comunicación local dieron a conocer el traslado de personas privadas de libertad, de los cuatro centros penitenciarios del Estado, a diferentes Centros Federales de Readaptación Social.

Con motivo de ello, esta Comisión a través de la medida precautoria número 54, solicitó al Secretario de Seguridad Pública que se informara a la autoridad judicial correspondiente sobre el traslado de las personas privadas de su libertad a los Centros Federales, para que ésta determinara lo conducente, y para que en todos los casos de traslados de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, la orden fuera emitida o validada por la autoridad judicial que conozca del proceso.

De lo anterior, se tiene que únicamente el Centro de Reinserción Social Apodaca, allegó los documentos mediante los cuales comprobó que dio vista a la autoridad judicial correspondiente, sobre el traslado de las personas privadas de libertad de ese reclusorio.

Por lo que hace al resto de centros penitenciarios, la autoridad sólo se concretó a manifestar que tenían el plazo de 24 horas para notificar a las autoridades judiciales a cuya disposición se encuentran las personas privadas de la libertad, sobre el traslado.

A la fecha de la presente resolución, esta Comisión no cuenta con constancia alguna de que el resto de los centros penitenciarios cumplió con lo dispuesto en la Ley Nacional, lo que violenta los derechos humanos de las personas trasladadas, establecido en el numeral 52.

Por otra parte, el artículo 53 del mismo ordenamiento, prohíbe el traslado involuntario de mujeres embarazadas. De los dictámenes médicos, se advirtió que una de las mujeres trasladadas, contaba con 12 semanas de gestación.

Segunda. Después del traslado de personas privadas de la libertad del penal Topo Chico, la autoridad penitenciaria, informó que, una vez concluido el operativo de traslado, los policías de Fuerza Civil se retiraron del penal; un grupo aproximado de 300 reclusos iniciaron un enfrentamiento en el área de ampliación, por lo que tuvieron que ingresar de nueva cuenta elementos de Fuerza Civil y, en conjunto con elementos de custodia, contuvieron a los rijosos y recuperaron la seguridad del centro penitenciario.

De la nota periodística publicada en el periódico El Norte, de fecha 28 de marzo de 2019, titulada “Trasladan a 501: se tensa el Topo”, se desprende que se registró una riña en el penal Topo Chico, por lo que los custodios intervinieron para contener a los internos, que fueron llevados al área de canchas.

Al respecto, este organismo cuenta con el video publicado en esa misma fecha, en la plataforma digital del periódico El Norte, del que se puede observar a personas que ingresan a un campo, mismos que son golpeados por uniformados con objetos que traen en las manos, y también les propinan patadas.

Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que los documentos de prensa podrán ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso¹³.

De las entrevistas hechas a P1, P6, P7, P8, P12, Q1 y Q2 que resultaron lesionadas en los referidos hechos, sus manifestaciones coincidieron al señalar que fueron agredidos físicamente por policías de Fuerza Civil y elementos de custodia, con tubos, macanas y la culata de un arma, aun y cuando ya se encontraban con cinchos en las manos o tirados en el suelo.

En estos hechos, un recluso resultó lesionado por esquirla de arma de fuego, de acuerdo al dicho de la autoridad, fue otro privado de la libertad quien disparó.

La afectación a la integridad física de los reclusos, se acredita con los dictámenes médicos realizados por peritos médicos de este organismo, en fechas 27 de marzo, 1 y 2 de abril del año que transcurre, los cuales evidencian que la causa probable de las lesiones fue por traumatismos contusos y una por

¹³ Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 77.

proyector de arma de fuego¹⁴. Los dictámenes que fueron elaborados en marzo, especifican como tiempo probable en que fueron conferidas las lesiones, menor de 24 horas; mientras que los del mes de abril, el tiempo probable fue menor a 15 días.

Por lo antes expuesto, es que se concluye que no se garantizó la integridad moral, física y psicológica, de las personas privadas de la libertad, por lo que se trasgredió por parte de la autoridad penitenciaria, como por los elementos de Fuerza Civil, el derecho a la integridad personal.

Ahora bien, tanto el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, como la Ley de Seguridad Pública del Estado, señalan que se podrá hacer uso de la fuerza, atendiendo al principio de proporcionalidad. Por lo tanto, toda vez que las personas internas ya se encontraban sometidas con cinchos, se acredita que los elementos de fuerza civil y elementos de custodia, hicieron uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, como tratos crueles hacia las personas internas.

Tercera. El mismo 28 de marzo de 2019, fueron del dominio público, dos fotografías en la portada del periódico el Norte, en las que se observa a las personas reclusas en el penal Topo Chico, desnudas o en ropa interior.

De la información rendida por el Alcaide, se tiene que se utilizó el espacio de la cancha para llevar a las personas internas para proceder al cambio del uniforme, debido a la sobrepoblación que existe en el penal, y por ser éste un lugar amplio, y que nunca se desnudó a las personas internas.

En cuanto a la sobrepoblación que señala el Alcaide, esta Comisión publicó en el Informe Especial sobre el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico del año 2016, que la capacidad instalada de ese reclusorio era de 3,685, aunado a las ampliaciones que ha tenido ese centro penitenciario a la fecha, y al traslado efectuado en meses anteriores, y el mismo 27 de marzo del presente año, no se puede argumentar que el penal esté sobrepoblado.

Respecto al desnudo de las personas reclusas en el referido penal, el Alcaide lo negó; pero, las notas periodísticas y los videos publicados por el periódico El Norte, dan cuenta que los reclusos, sí estaban desnudos, por lo que atendiendo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos

¹⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela Sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 70.

Humanos, esta Comisión toma como evidencia lo publicado por el medio de comunicación, ya que corroboran el dicho de las personas privadas de la libertad.

De las declaraciones realizadas por los reclusos entrevistados, tenemos que fueron llevados a la cancha, Q1 fue desnudado, y mencionó que, en la cancha, se encontraban aproximadamente 300 de sus iguales, sometidos; mientras que Q2, no fue desnudado, pero si observó a otros reclusos, sin ropa; así también, P13 manifestó haber quedado en ropa interior (bóxer), en la misma cancha. De las manifestaciones de éstos, se advierte que estuvieron desnudos en la cancha del penal, por una hora aproximadamente.

Por lo tanto, respecto al hecho de que los privados de la libertad en el penal Topo Chico, fueron despojados completamente de su ropa o estaban en ropa interior, por un lapso aproximado de una hora, se traduce en violación al artículo 61 de la Ley Nacional que establece que los actos de revisión se deberán realizar en condiciones dignas, y no comprenderá el desnudo integral, al principio 6 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, que refiere que, ninguna persona será sometida a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de estos, por lo que no es admisible el argumento del Alcaide respecto a la sobrepoblación del reclusorio, para llevar a los reclusos a las canchas del penal, ya que con esa acción se vulneró la dignidad personal de los privados de la libertad.

Lo anterior, se acredita con el Dictamen médico/psicológico basado en los lineamientos del Protocolo de Estambul a Q1, en fecha 04 de abril de 2019.

De igual manera, se violentó lo estipulado en el artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el principio I del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que establecen que la persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que todos los internos son víctimas de un trato violatorio de su dignidad personal, cuando son sometidos durante periodos prolongados a desnudez forzada¹⁵.

¹⁵ Caso Castro y Castro vs Perú, párrafo 305.

Cuarta. Por otra parte, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), establecen que se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes¹⁶, en este sentido, la autoridad penitenciaria no adoptó las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad y de los elementos de custodia que realizaban las revisiones en el interior del penal Topo Chico.

Lo anterior, toda vez que de los hechos suscitados el 27 de marzo de 2019, la misma autoridad refirió que resultaron lesionados 73 personas privadas de la libertad y 23 policías custodios.

Quinta. Como resultado de las revisiones realizadas al interior del penal Topo Chico, la autoridad penitenciaria aseguró armas de fuego, y municiones, así como droga, puntas hechizas; en razón de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de las mismas.

Por lo tanto, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, y evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de los internos, entre otros¹⁷.

En el presente asunto, es evidente la falta de un protocolo de revisión, que prevea detectar el ingreso de armas de fuego al penal Topo Chico, toda vez que por la falta de este, se vulneró el derecho a la integridad personal de P10 quien resultó lesionado por arma de fuego y de toda la población penitenciaria.

2.3. Conclusiones

Esta Comisión considera que personal de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil y elementos de custodia, dependientes de la Secretaría de Seguridad

¹⁶ Regla 1

¹⁷ Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de Urbana) respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de 2013, párrafo 7.

Pública del Estado violaron los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el penal Topo Chico, al contravenir lo dispuesto en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como lo establecido en los artículos 9 fracción X y 61 de la Ley Nacional, y al Principio 6 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención.

Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que se violaron los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por la abstención u omisión en el deber de custodia y no brindar una adecuada protección a la integridad física y psicológica de las personas privadas de la libertad el centro penitenciario Topo Chico; así como al derecho a la integridad personal en relación al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3. Reconocimiento de Víctima.

Esta Comisión reconoce a P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, Q1 y Q2, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC22 y PC 23, la calidad de víctima, por haber sido las personas que sufrieron directamente las violaciones a los derechos humanos de los que se ha dado cuenta en la presente determinación.

En tal sentido, la autoridad responsable deberá colaborar, en todo lo necesario, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.

4.Reparación de Violaciones a Derechos Humanos

Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos tienen como objetivo buscar que se tomen medidas o mecanismos necesarios para la efectiva e íntegra reparación del daño causado a través de medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición¹⁸, aplicadas bajo la perspectiva del nexo causal que debe existir entre los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados y las medidas emitidas para reparar los daños.

¹⁸ Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Ley de Víctimas para el estado de Nuevo León.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la reparación debe ser adecuada al daño sufrido para generar un resarcimiento apropiado¹⁹.

A la luz del principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, no se debe -por razones de orden interno- dejar de asumir la responsabilidad internacional, atento a lo previsto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales.

4.1. Satisfacción

La adopción de medidas eficaces para que no continúen las violaciones a derechos humanos forman parte de la satisfacción, así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a quienes sean responsables de las violaciones acreditadas.

Tomando en cuenta la violación de los derechos humanos mencionados, se considera procedente solicitar que el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inicie las investigaciones a fin de deslindar la responsabilidad administrativa de las personas involucradas en las violaciones de derechos humanos acreditadas.

Para tal efecto, deberá agregarse copia de la presente resolución a los procedimientos que se inicien y deberá informarse el resultado de los mismos.

4.2. Garantías de no repetición

Con la finalidad de garantizar la no repetición de los actos analizados, la autoridad debe adoptar las medidas necesarias tendentes a prevenir que se vuelvan a cometer violaciones similares.

Por lo tanto, la autoridad penitenciaria debe dar vista al juez competente sobre el traslado a otro centro penitenciario de las personas privadas de la libertad, conforme a lo señalado en la Ley Nacional para que una vez que la autoridad jurisdiccional tenga conocimiento del mismo, este en aptitud de validar el mismo.

¹⁹ SCJN. Primera Sala. Jurisprudencia (constitucional). 1º./J.31/2017. Décima época. "Derecho fundamental a una reparación integral o justa indemnización. Su concepto y alcance". Abril, 2017.

4.2.1. Protocolos

Tomando en cuenta las violaciones de derechos humanos que fueron declaradas, se considera procedente solicitar como medida reparatoria que se tomen las acciones necesarias para la debida implementación de un protocolo de actuación para brindar información oportuna tanto a la familia de las personas reclusas, como a personal de este organismo.

Además, otro protocolo en relación a las revisiones al interior del penal, atendiendo lo estipulado en la Ley Nacional, mismos que deberán ser socializados al personal de los otros centros penitenciarios del estado.

Una vez acreditado que al interior del penal Topo Chico existía la presencia de armas de fuego, la autoridad penitenciaria, a fin de evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando, deberá proveer el equipo necesario en todos los penales del Estado para detectar el ingreso tanto de objetos, sustancias y armas de fuego al interior de estos.

Para fortalecer la profesionalización del personal de custodia asignado al Penal del Topo Chico, incluido el personal de Fuerza Civil que intervino en los hechos estudiados en la presente resolución, bríndense cursos de sensibilización, formación y capacitación en materia de derechos humanos, así como sobre los derechos, como deberes del personal penitenciario en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, en atención al reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, colabore en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas del Estado.

4.3. Rehabilitación

La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

Al considerar que las víctimas resultaron con afectaciones a su integridad física, se solicita que previo consentimiento se les brinde atención médica y psicológica tanto a las personas privadas de la libertad como a las y los elementos de custodia.

En virtud de lo expuesto y fundado se formulan las siguientes:

5. Recomendaciones:

PRIMERA. Dese vista al Órgano de Control Interno de la dependencia a su cargo, a efecto de que se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa con motivo del expediente que se resuelve.

Así como para determinar la responsabilidad en la que se incurrió, al despojar de las prendas de vestir y mantener desnudos en la cancha, a las personas privadas de libertad.

SEGUNDA. Se gire la instrucción a los Alcaldes del Centro de Reinserción Social Apodaca, Centro de Reinserción Social Cadereyta, Centro de Reinserción Social Femenil y del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico para que en todos los casos de traslados de una persona privada de la libertad de un centro penitenciario a otro, la orden sea emitida o validada por la autoridad judicial que conozca del proceso.

TERCERA. Se brinde atención médica y psicológica, previo consentimiento, a las personas privadas de la libertad y a los elementos de custodia que resultaron lesionadas en los hechos del 27 de marzo de 2019, en el penal Topo Chico, que se señalaron en el punto 3 de esta recomendación.

CUARTA. Se dote del equipo tecnológico necesario para realizar revisiones efectivas a todas las personas que ingresen al centro penitenciario, a fin de evitar que se introduzcan armas de fuego, objetos y/o sustancias prohibidas.

QUINTA. Se implementen los protocolos necesarios, para que, en lo subsecuente, en las revisiones a las personas privadas de la libertad se atienda a los principios necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y se realicen en condiciones dignas, respetando la intimidad e integridad de las personas revisadas.

SEXTA. Se elabore un protocolo encaminado a brindar de forma veraz y oportuna información tanto a familiares, como a personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre los hechos que estén aconteciendo ante cualquier eventualidad, al interior del penal Topo Chico.

SEPTIMA. Bríndense cursos de sensibilización, formación y capacitación en materia de derechos humanos, uso de la fuerza, así como sobre los derechos

y deberes del personal penitenciario, como de Fuerza Civil en el ejercicio de sus funciones.

OCTAVA. Este organismo, reitera la necesidad de implementar protocolos en materia de uso de la fuerza, como ya fue señalado en la recomendación 34/2017, para que se regule la actuación del personal de custodia como del personal de Fuerza Civil, en las intervenciones que realicen en el interior de los centros penitenciarios.

De conformidad con la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se hace de su conocimiento que, recibida la presente Recomendación, dispone del término de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente a su notificación, a fin de informar si se acepta o no la misma.

En caso, de no ser aceptada o cumplida, se procederá en la forma y términos descritos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 46 de la Ley mencionada en el parrado que antecede.

En caso de ser aceptada, dispondrá de un plazo de 10 días adicionales contados a partir del siguiente a que se haga del conocimiento de este Organismo la aceptación, a fin de remitir las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con lo recomendado.

Lo anterior con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y la Ley que crea la Comisión y su Reglamento Interno. Notifíquese.

Mtra. Sofía Velasco Becerra
Presidenta de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nuevo León

L'IACS/L'LVO